

**MEMORIA EJECUTIVA INICIAL DEL ANÁLISIS DE IMPACTO
NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE
LA LEY 6/2016, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ORDENA
EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE EN LA
COMUNIDAD DE MADRID.**

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Órgano Proponente	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte	Octubre 2021
Título de la Norma	Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid.	
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> extendida	<input checked="" type="checkbox"/> ejecutiva
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA		
Situación que se regula	Modificación de diversos aspectos de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid.	
Objetivos que se persiguen	1. Adecuación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, a la regulación establecida en el Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia.	



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Prever que la Dirección General de Deportes pueda recabar la colaboración de otros servicios de inspección de la Administración de la Comunidad de Madrid o de otras administraciones. 3. Eliminar la referencia al principio de eficacia nacional previsto en el artículo 6 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, al haber sido declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2017. 4. Mejorar la información al consumidor o usuario de servicios deportivos acerca de la existencia del preceptivo seguro de responsabilidad civil, que garantice el resarcimiento de los perjuicios causados en un evento dañoso. 5. Tipificar como infracción la obstrucción a la labor inspectora. 6. Dotar de seguridad jurídica a las personas que desempeñaban funciones relacionadas con las profesiones del deporte con anterioridad a la aprobación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, para que puedan seguir su actividad en un periodo que se extenderá hasta la entrada en vigor del decreto de desarrollo, todo ello, sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener los profesionales del sector deportivo en aras a proteger la salud de los ciudadanos.
Principales alternativas consideradas	La propuesta normativa resulta imprescindible para permitir que las personas que desempeñaban funciones relacionadas con las profesiones del deporte con anterioridad a la aprobación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, puedan presentar la declaración responsable que les permita seguir ejerciendo la profesión.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de Norma	Anteproyecto de ley.
Estructura de la Norma	El anteproyecto de ley se estructura en una parte expositiva y una dispositiva integrada por un artículo y una disposición final.



Informes a recabar	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de coordinación y calidad normativa. - Informes de impacto por razón de género, de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia y de impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género (Dirección General de Igualdad, Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad). - Informe de las secretarías generales técnicas. - Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. 	
Trámite de consulta pública	Se debe someter al trámite de consulta previa.	
Trámite de audiencia e información públicas	Se somete al trámite de audiencia e información públicas.	
ANÁLISIS DE IMPACTOS		
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	<p>Este anteproyecto de ley se formula conforme al artículo 21.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que determina que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los proyectos de Ley para su remisión a la Asamblea.</p> <p>El órgano proponente de la norma es la Dirección General de Deportes en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 9 del Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p>	
IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la economía en general	Del contenido del proyecto se deriva un impacto positivo en la actividad económica.
	En relación con la competencia	<input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.





	<p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p>	<p><input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada:_____</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada:_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas .</p>
	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto.</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No implica gasto ni ingreso</p>
IMPACTO DE GÉNERO		<p><input type="checkbox"/> Negativo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nulo</p> <p><input type="checkbox"/> Positivo</p>





OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS: INFANCIA, MENOR, ADOLESCENCIA, FAMILIA E IGUALDAD		<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
IMPACTO EN LA UNIDAD DE MERCADO	Se considera que la norma no tiene un impacto en la unidad de mercado.	
OTRAS CONSIDERACIONES	NINGUNA	



La presente memoria se ha elaborado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

Según se recoge en el artículo 6.1 del citado decreto, se realizará una memoria ejecutiva, pues se estima que de la propuesta normativa no se derivan impactos económicos, presupuestarios, sociales, sobre las cargas administrativas o cualquier otro análogo, apreciables, o estos no sean significativos.

1. OPORTUNIDAD DEL PROYECTO.

a) Fines y objetivos perseguidos.

La Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid, está basada en el Marco Europeo de Cualificaciones y en el Marco Español de Cualificaciones de la Educación Superior, como instrumento de referencia para comparar los niveles establecidos según los distintos criterios desde la perspectiva del aprendizaje continuo en el marco europeo.

La citada ley tiene como objetivo principal el de proteger y mejorar la salud, la educación, la integridad física y la calidad de vida de los consumidores, usuarios o deportistas en una prestación de servicios deportivos, e impone especiales obligaciones cuando la seguridad de los destinatarios de los servicios puede verse especialmente comprometida.

Como consecuencia de los cambios normativos acaecidos desde la aprobación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, se propone su modificación. Además, al no haberse procedido al desarrollo reglamentario, se elimina el plazo que se fijó inicialmente para que las personas que desempeñaban funciones relacionadas con las profesiones del deporte con anterioridad a la aprobación de la Ley, puedan presentar la declaración responsable que les permita ejercer la profesión hasta la aprobación de la futura disposición reglamentaria.

b) Adecuación a los principios de buena regulación.

En el contenido y tramitación de este anteproyecto de ley, se han observado los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

Su adecuación a los principios de necesidad y eficacia viene justificada en la necesidad de adecuar la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, a la normativa vigente y remover los obstáculos que dificultaban el ejercicio de la profesión deportiva por determinadas personas.



De la misma manera, se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible y necesaria para que la norma responda a las previsiones de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, su adecuación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se procede a concretar la regulación en una norma que será objeto de publicación. El anteproyecto no afecta a ninguna disposición normativa estatal o comunitaria.

En cuanto al principio de transparencia, se somete a los trámites de participación pública, esto es, consulta pública y trámites de audiencia e información pública.

Finalmente se adecúa al principio de eficiencia pues no se establece cargas administrativas innecesarias.

c) Análisis de las alternativas.

No se han planteado otras alternativas, siendo necesario la aprobación de la modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre.

d) La norma proyectada no figura en el Plan Normativo.

El Decreto 52/2021, de 24 de marzo, establece en su artículo 3 que durante el primer año de cada legislatura se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid el Plan Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno para dicho período.

Dicho Plan Normativo no se ha aprobado todavía para la Legislatura actual.

No obstante, el artículo 3.3. del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, faculta a la tramitación de propuestas normativas no incluidas en el Plan, siempre que se justifique su necesidad adecuadamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Por tanto, la presente norma no está incluida en el Plan Normativo al no haberse este aprobado todavía, ni se había previsto tampoco en Planes Anuales Normativos de anteriores años.

2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO.

En cuanto a la naturaleza jurídica, se trata de una norma de carácter general, con efectos ad extra.

El anteproyecto se incorporará al anteproyecto de ley que tramita la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y que incorpora las propuestas formuladas por



distintas consejerías. En lo concerniente al anteproyecto que promovemos tiene una parte expositiva y una dispositiva integrada por un artículo y una disposición final.

Se proponen las siguientes modificaciones relativas a la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, con base en los siguientes motivos:

Primero.

En el artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, se mantienen sin cambios los apartados 1 a 5 y se propone añadir los apartados 6, 7 y 8.

Justificación: Como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, se propone añadir los apartados 6, 7 y 8 en el artículo 2, en cumplimiento de la citada ley orgánica.

El texto del punto 8 se corresponde con el artículo 47 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, que establece los «Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio».

Segundo.

En el artículo 5 se añade una referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Justificación: La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte carece de un servicio de inspección necesario para verificar la realidad de los hechos denunciados en la tramitación de los expedientes sancionadores. Por ello, se propone añadir una referencia a las leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, para fundamentar la colaboración de otros servicios de inspección, así como en garantía de los derechos de los ciudadanos en el procedimiento sancionador.

Tercero.

En el artículo 13.1 se propone eliminar la parte del párrafo que hace referencia al principio de eficacia nacional recogido en el artículo 6 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, al haber sido declarado inconstitucional y nulo este precepto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2017, de 5 de octubre.

Justificación: Adecuación de la normativa a la jurisprudencia constitucional.



Cuarto.

En el artículo 25, apartado 1, relativo a la publicidad de los servicios deportivos, se debe corregir la errata consistente en que donde dice «servidos», debe decir «servicios».

-Asimismo, en el artículo 25, se incluye el apartado número 5, relativo a la información a los usuarios de la existencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil en garantía de sus derechos en caso de accidente o lesiones de cualquier tipo, derivadas de la práctica deportiva.

Justificación: En el primer caso, se corrige el error ortográfico detectado. En el segundo caso, supone la mejora de la información al consumidor o usuario de servicios deportivos acerca de la existencia del preceptivo seguro de responsabilidad civil, que garantice el resarcimiento de los perjuicios causados en un evento dañoso.

Quinto.

En el artículo 27.1, relativo a la competencia en materia de los procedimientos sancionadores, se modifica la titularidad de la competencia para iniciar e instruir los mismos.

Justificación: Este artículo se debe acomodar a lo previsto en el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, que indica, en su artículo 4, lo siguiente:

1. Serán competentes para iniciar y resolver el procedimiento sancionador los órganos que establezca la norma sustantiva sancionadora o, en su defecto, los que tengan competencia por razón de la materia.
2. La función instructora se ejercerá por quien determinen las normas sancionadoras o las normas sobre atribución y ejercicio de competencia y, en su defecto, por quien determine el órgano competente para la incoación del procedimiento. En todo caso, la fase de instrucción y la fase de resolución deberán atribuirse a órganos o unidades administrativas distintas.

En sentido similar, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece en su artículo 63.1:

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.



Sexto.

En la tipificación de las infracciones no consta la obstrucción a la labor inspectora.

Justificación: En el artículo 28 se propone la inclusión de los apartados 2.c y 3.g, al no estar tipificado el supuesto de que el sujeto inspeccionado no conteste a los requerimientos de información que se le practiquen.

Séptimo.

Se modifica la disposición transitoria primera, relativa a la habilitación para el ejercicio profesional sin la cualificación requerida en la ley.

Justificación: Al no haberse procedido al desarrollo reglamentario, se elimina el plazo que se fijó inicialmente para que las personas que desempeñaban funciones relacionadas con las profesiones del deporte con anterioridad a la aprobación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, puedan presentar la declaración responsable que les permita ejercer la profesión hasta la aprobación de la futura disposición reglamentaria.

Octavo.

En la disposición final segunda se prorroga el plazo para el desarrollo reglamentario.

Justificación: Transcurrido el plazo máximo para el desarrollo normativo de la Ley, hay que tener en cuenta el contenido del recientemente aprobado Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, en especial, artículo 7.

Por otra parte, está en tramitación un anteproyecto de ley del deporte estatal que se refiere, asimismo, a la futura regulación de las profesiones del deporte y que indica en su disposición adicional quinta, lo siguiente:

Regulación de las profesiones del deporte: El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de Ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte, estableciendo, dentro de sus competencias, los derechos y obligaciones de los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas.

Es esperable que la futura regulación respete los principios contenidos en el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, y contribuya a facilitar la libre circulación de los trabajadores (profesionales del deporte) en el ámbito de la Unión Europea.



3. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL PREVALENTE.

El artículo 26.1.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, le atribuye la competencia exclusiva en materia de deporte y ocio.

El artículo 21.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, determina que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los proyectos de Ley para su remisión a la Asamblea.

El órgano proponente de la norma es la Dirección General de Deportes en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 9 del Decreto 88/2021, de 30 de junio.

4. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.

a) Impacto económico y sobre la unidad de mercado. La aprobación del anteproyecto de ley no conlleva impacto económico en el mercado.

Por la misma razón, carece de impacto en la unidad de mercado, toda vez que no incide en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, ni en la libre circulación de los bienes y servicios en el territorio nacional, ni tampoco en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, en los términos establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

b) El proyecto que se tramita no implica impacto presupuestario.

5. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

En el marco de los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableció la obligatoriedad, establece que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

Por ello y de conformidad con el artículo 6.1.e) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, se solicitará informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

6. IMPACTO SOBRE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, modificadas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia disponen que las memorias del análisis de impacto



normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

De conformidad con el artículo 12.2.d) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, se solicitará informe a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

7. IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

En este sentido y de conformidad con el artículo 12.2.d) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, se solicitará informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

8. OTROS IMPACTOS.

De la presente propuesta no se derivan impactos jurídicos, ambientales o económicos apreciables. Tampoco afecta al orden competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Como consecuencia de la naturaleza del proyecto, no conlleva cargas administrativas para los ciudadanos ni para las PYMES.

9. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS A REALIZAR

En la tramitación del proyecto resulta de aplicación el procedimiento previsto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

Conforme al contenido de la propuesta, la tramitación es la siguiente:

- Consulta pública.
- Informe de coordinación y calidad normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
- Informes de impacto por razón de género, de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia y de impacto por razón de orientación sexual,





identidad o expresión de género (Dirección General de Igualdad, Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad).

- Informe de las secretarías generales técnicas.
- Trámite de audiencia e información públicas
- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

10. ADECUACION A LA LEGALIDAD DE VIGENTE.

El contenido del proyecto se considera adecuado a la legalidad.

La Directora General de Deportes

